SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 13/2024

Recomendación N°	13/2024
Autoridades Responsables	Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S.L.P.
Expediente	4VQU-0012/2021
Fecha de emisión/	29 de noviembre de 2024
HECHOS	
<p>Este Organismo Estatal inició la investigación por violaciones a los derechos humanos de V, atribuible personal adscrito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P.</p> <p>Este Organismo Estatal con fecha 17 de febrero de 2021, inició la investigación por violaciones a derechos humanos en agravio de V, por hechos atribuidos a personal adscrito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., El 17 de febrero de 2021, a las 10:23 horas V fue asegurado por SP1, SP2, SP3 y SP4, policías de la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado, por cometer una falta administrativa, luego de realizar el registro en la cabina de radio de la Jefatura de Región Zona Altiplano, lo trasladaron a las celdas de la Dirección General de Seguridad Pública de Municipal, S.L.P., dejándolo a disposición de AR1 Juez Calificador y AR2 oficial de Barandilla, lo anterior a efecto determinar la sanción administrativa correspondiente, sin embargo durante su estancia, un agente de la policía municipal lo saco de la celda y lo llevo al patio, donde fue agredido física y psicológicamente por más elementos de esa corporación policiaca, no obstante AR1 Juez Calificador si determinó como sanción el arresto de V por tres horas, omitió la certificación medica de V y AR2 permitió que fuera excarcelado, por lo que V fue víctima de agresiones por servidores públicos.</p> <p>Al iniciar la investigación, se advirtió que, por motivo de los tratos producidos a V, D presento denuncia penal radicando la Carpeta de Investigación CDI-1 ante el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Temprana, la cual fue remitida posteriormente a la Agencia del Ministerio Público de Investigación y Litigación para la debida integración.</p>	
Derechos Vulnerados	<p>DERECHO A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD.</p> <p>Derechos Humanos vulnerados: Por trato cruel, inhumano o degradante y omisión para evitar casos trato cruel inhumano o degradante, omisión de informar a las personas detenidas del motivo o de su detención y por omitir elaborar certificado de integridad física y/o evaluación médica inicial</p>
OBSERVACIONES	
A. Derecho a la Integridad y Seguridad Personal	
<p>Por trato cruel, inhumano o degradante y omisión para evitar casos trato cruel inhumano o degradante</p> <p>El derecho a la integridad personal es aquél que tiene toda persona para no ser objeto de vulneraciones sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Se encuentra previsto en los artículos 1º, 16, párrafo primero, 19, último párrafo y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer precepto se reconoce que todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea</p>	

parte, y en los siguientes preceptos queda previsto el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de los servidores públicos de salvaguardar su integridad personal.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó la tesis constitucional: “Derechos a la integridad personal y al trato digno de los detenidos. Están tutelados constitucional y convencionalmente y son exigibles independientemente de las causas que hayan motivado la privación de la libertad. “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal, así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos.”

Asimismo, los artículos 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I, XXV, párrafo tercero, y XXVI, párrafo segundo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y en el principio 1, del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, de las Naciones Unidas; coinciden en que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes con motivo de la privación de su libertad.

Los artículos 1, 2 y 16.1 de la “Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles Inhumanos o Degradantes” de las Naciones Unidas; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; 3 y 4, incisos b, d y e, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará); y 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las Naciones Unidas; señalan la obligación del Estado para impedir todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, lo que conlleva a la protección de la dignidad, la integridad física y psicológica de la persona.

Lo anterior se traduce en que cualquier persona tiene derecho a que se proteja su integridad física, psicológica y moral, y no admite de ningún modo que este derecho se vea disminuido o eliminado. Más aún cuando estas personas se encuentran bajo la protección del Estado, que actúa como garante de quienes por cualquier situación están privadas de la libertad.

De las evidencias descritas por este Organismo Estatal, se acreditó la violación a los derechos humanos a la seguridad e integridad personal; por trato cruel, inhumano o degradante en agravio V por parte de servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., el 17 de febrero del 2021, lo anterior con anuencia de AR1 y AR2, Juez Calificador y Encargado de Barandilla, respectivamente, lo anterior se acreditó con el oficio número 0090/21 y oficio de novedades, ambos suscritos por AR1, en los cuales describió que V, fue puesto a su disposición; asimismo obra la Bitácora de Servicio en la que se advierte que AR2, era el encargado de Barandilla el 17 de febrero de 2021 en horario de 09:00 a 21:00 horas.

La violación a los derechos humanos de V, se encuentra acreditada con lo referido en su declaración del 18 de febrero de 2021, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana-Matehuala y en su comparecencia ante este Organismo el 16 de marzo de 2022; la declaración de D del 18 de febrero de 2021 rendida ante esta Comisión; dictamen de integridad física de V, elaborado por el Perito Medico Dictaminador el 18 de febrero de 2021; valoración psicológica de V y oficio del 31 de marzo del 2021, en la que perito dictaminador médico legal del Poder Judicial, emitió opinión de causa-efecto entre las lesiones presentó V.

De esta manera, se indica que V a las 10:23 horas, del 17 de febrero de 2021, fue asegurado por SP1, SP2, SP3 y SP4 policías de la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado, quienes lo trasladaron a las celdas de la Dirección General de Seguridad Municipal de Matehuala, S. L. P., donde fue recibido por AR2, tal y como consta en el oficio sin número, del 17 de febrero de 2021, suscrito por los servidores públicos de la entonces Policía Estatal, mediante el cual ponen a disposición a V para la sanción administrativa que haya a lugar y en este se observa acuse de recibido a las 10:34 horas, del 17 de febrero de 2021 por parte de AR2.

Lo anterior, cobra relevancia con las declaraciones de V ante esta Comisión Estatal y en la Fiscalía General del Estado, al señalar de manera coincidente que aproximadamente a las 10:00 horas del 17 de febrero de 2021, fue asegurado por SP1, SP2, SP3 y SP4, Policías de las entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado, quienes le informaron que sería asegurado por una falta administrativa, que luego de llevarlo a la comandancia de esa corporación Estatal, lo trasladaron a las celdas de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., donde permaneció cerca de dos horas, ya que un policía municipal lo saco al patio, ahí más policías se acercaron y comenzaron a golpearlo con el tolete y con un cable, le pegaron en el rostro, la espalda, estómago y glúteos. Asimismo, manifestó que no fue certificado por médico y que obtuvo su libertad aproximadamente a las 17:00 horas, sin haber pagado multa.

Concatenado a lo anterior, obra la Opinión Psicológica practicada por Psicóloga Adscrita a la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la cual concluyó y sugirió de manera textual lo siguiente: "Acorde al resultado de las pruebas aplicadas y de la observación realizada durante la entrevista a V mencionó mínimos síntomas de ansiedad, inseguridad, temor y leve afectación en sus actividades cotidianas a consecuencia de los hechos narrados. Sin embargo, aunque las pruebas él no mencionó tener ninguna otra sintomatología, es destacable que la información proporcionada por su padre, ya que son ellos quienes han estado al cuidado y tienen más conocimiento de sus síntomas. Por tanto, sugiero que, para tener un diagnóstico completo sobre su afectación emocional y mental a consecuencia de los hechos ocurridos, se soliciten valoraciones o informes médicos que están llevando su tratamiento."

Al analizar si los actos de los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., cumplen con los elementos de trato cruel, inhumano o degradante citado en la presente Recomendación se tiene lo siguiente:

Respecto de la existencia de un acto intencional, de las evidencias expuestas se aprecia que el maltrato fue deliberadamente causado en contra de V, por las agresiones físicas que le fueron inferidas. Es así que V presentó escoriación irregular con equimosis rojiza perilesional de 3.0x4. Cm de extensión situada en la región malar izquierda (refiere por contusión), escoriación irregularmente lineal de 10.0cm de extensión situada verticalmente en la región temporal y preauricular derechas, múltiples equimosis rojizas irregularmente lineales situadas en las siguientes regiones: de 30.0 cm de extensión por 2.0cm de ancho situada verticalmente en el hemitórax posterior izquierdo, otra con las mismas características situada oblicuamente en la región escapular izquierda con extensión a la región interescapular, dos con las mismas características y situadas horizontalmente y paralelas entre sien la base del tórax posterior (refiere provocadas por cable de luz), equimosis rojiza en totalidad de los glúteos (refiere por contusiones), lo anterior quedo asentado en el Dictamen de Integridad Física número 065/2021, del 18 de febrero del 2021, suscrito por el Perito Medico Dictaminador; en este sentido, mediante el oficio

STJ/SLP/SML/DM/160/2021, el perito Dictaminador Médico Legal, Perito Dictaminador en Criminología y Protocolo de Estambul, determinó que hay elementos categóricos para determinar una relación causa-efecto entre lo invocado por D en relación al Maltrato y Uso excesivo e irracional de la fuerza por elementos policiacos en la detención de V por una falta administrativa.

De la misma manera se advierte que las lesiones que presentó V, fueron infringidas en una mecánica de tipo intencional por terceras personas, originándole afectación psicológica y emocional, las que fueron producidas por agresiones que son contemporáneas a los hechos motivo de la queja.

En cuanto al sufrimiento severo, V fue víctima de golpes con un tolete y con un cable, le pegaron en el rostro, la espalda, estómago y glúteos, lo que se confirmó con el Dictamen de Integridad Física número 065/2021, del 18 de febrero del 2021, suscrito por el Perito Médico Dictaminador y el oficio STJ/SLP/SML/DM/160/2021, firmado por el perito Dictaminador Médico Legal, Perito Dictaminador en Criminología y Protocolo de Estambul, en el que determinó que hay elementos categóricos para determinar una relación causa-efecto.

Aunado a lo anterior, los datos clínicos y sintomatología que presentó V, hacen patente la presencia de un daño psicológico y emocional, lo anterior de acuerdo a la Opinión Psicológica practicada por Psicóloga Adscrita a la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien concluyó entre otras cosas que V presentó mínimos síntomas de ansiedad, inseguridad, temor y leve afectación en sus actividades cotidianas a consecuencia de los hechos narrados.

Ahora bien, no pasa de inadvertido para esta Comisión, que, si bien es cierto, que no se tienen identificados los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., que dieron un trato cruel, inhumano o degradante a V, también lo es que sufrió de violaciones a sus derechos humanos con la anuencia de AR1 y AR2, en su calidad de Juez Calificador y Encargado de Barandilla, respectivamente, ya que de acuerdo al oficio número 0090/21 y oficio de novedades, ambos suscritos por AR1 describió que V, fue puesto a su disposición; asimismo obra la Bitácora de Servicio en la que se advierte que AR2, era el encargado de Barandilla el 17 de febrero de 2021 en horario de 09:00 a 21:00 horas, no obstante, no realizaron acciones para evitar las agresiones que sufrió la víctima.

Por consiguiente, cobra vigor la adecuada vigilancia y custodia, toda vez que los servidores públicos involucrados en la impartición de justicia municipal en sede administrativa, tanto personal de la oficialía calificadora como elementos policiales, se convierten en garantes de las personas aseguradas, al ordenar y aceptar su resguardo; sin embargo AR1 y AR2, no garantizaron a V la debida custodia como persona detenida, si no que actuaron de manera contraria al permitir que fuera excarcelado para ser agredido por elementos de la policía municipal.

En conclusión, se acredita que AR1 y AR2, en su calidad de Juez Calificador y Encargado de Barandilla, respectivamente, fueron omisos en cumplir con el deber de vigilar y custodiar a V al estar detenido bajo su disposición.

B. Derecho al Debido Proceso

Por Omisión de informar a las personas detenidas del motivo o de su detención

El debido proceso se entiende como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados y que garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial.

Al respecto, la SCJN estableció la siguiente tesis constitucional 1a./J. 11/2014 (10a.) que menciona que dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse que inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.

Al respecto, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

El derecho a un debido proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el derecho de defensa procesal", es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como "aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto". Es también lógico al ser el proceso penal el medio por el cual se investigan hechos delictivos que para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio, se permita establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, pero dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y teniendo siempre en mente el respeto al derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello ha justificado que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que, por su propia naturaleza, no le serían aplicables. El tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana") le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su artículo 8, el cual se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7,5 el artículo 9,6 el artículo 10,7 el artículo 24,8 el artículo 25,9 y el 27,10 todos de la Convención Americana. La Convención Americana desarrolla algunos principios del debido proceso que en ella se anotan o se coligen y que son consecuencia de

los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un “garanticismo proteccionista” del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él: el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social.

Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia.

Entendido éste como “el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada.

Tratándose de la impartición de justicia administrativa municipal, corresponde al Juez Calificador la potestad sancionadora cuando un ciudadano incurre en faltas o infracciones a los respectivos bandos municipales, y previa aplicación imparcial de los pertinentes procedimientos administrativos que valoren la legalidad del aseguramiento del ciudadano, sus resoluciones deben ser prontas y expeditas, lo que no ocurrió en el presente asunto, pues esta Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió que el Juez Calificador solo se aboco a emitir una sanción de tres horas de arresto en contra de V, por haber cometido una falta administrativa al alterar el orden público, sin embargo no acredito haber agotado la audiencia de infractor.

Cabe destacar que AR1, no cumplió a lo establecido en los artículos 76, 77, 78, 79, y 83, del Bando de Policía y Gobierno de Matehuala, ya que se ha evidenciado que no realizó acta de audiencia de infractor.

No pasa de inadvertido que entre otras acciones, cobra vigor la adecuada vigilancia y custodia, toda vez que los servidores públicos involucrados en la impartición de justicia municipal en sede administrativa, tanto personal de la oficialía calificadora como elementos policiales, se convierten en garantes de las personas aseguradas, al ordenar y aceptar su resguardo, lo que no ocurrió en el presente asunto, tal como quedó plasmado en el inciso A., de las presentes Observaciones.

C. Derecho a la Protección a la Salud

Por omitir elaborar certificado de integridad física y/o evaluación médica inicial

Un examen médico inicial es una evaluación que debe ser realizada a todos los detenidos por un médico u otro profesional de la salud calificado lo antes posible, tras su llegada un lugar de detención. Las normas internacionales y la bibliografía se refieren a ese procedimiento con diferentes fórmulas, por ejemplo “reconocimiento médico inicial”,

“evaluación médica inicial”, “reconocimiento en el momento de la recepción”, “reconocimiento médico inicial en el momento de la recepción”, “reconocimiento médico inicial” o “control de salud inicial”.

El examen médico inicial constituye un medio eficaz de detección temprana de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos). Ayuda a garantizar la protección y el tratamiento médico y psicológico adecuado de las víctimas de tortura y otros malos tratos y brinda la oportunidad de remitir esos

posibles casos a las autoridades competentes para su investigación y, cuando proceda, para su enjuiciamiento. Además, puede prevenir los malos tratos, al detectar y tratar los problemas de salud de los detenidos recién llegados que requieren atención urgente, lo que podría resultar disuasorio frente a actos de tortura o malos tratos susceptibles de perpetrarse antes de trasladar al detenido al lugar de detención preventiva o el establecimiento penitenciario.

Aunque no se menciona expresamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, el examen médico inicial constituye un medio útil para prevenir los actos de tortura y los malos tratos, y tiene una base sólida en diversas normas internacionales y regionales. No obstante, varios órganos de vigilancia tanto nacionales como internacionales han señalado que en muchos países del mundo los exámenes médicos son poco rigurosos y a menudo no se ajustan a protocolos sistemáticos.

El examen médico inicial debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias locales de cada país, en particular los recursos disponibles y la situación del personal en los lugares de detención preventiva y los establecimientos penitenciarios.

Objetivos del Examen Médico Inicial

El examen médico inicial cumple varios objetivos importantes, no solo para los detenidos, sino también para el personal penitenciario, el resto del personal que trabaja en los lugares de detención, los responsables de la gestión y la administración penitenciarias y la sociedad en general.

Objetivos relacionados con la tortura y otros malos tratos

El examen médico inicial tiene un papel importante en la detección de los casos de tortura y otros malos tratos y sirve, en última instancia, para garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y la rehabilitación plena. Los exámenes médicos iniciales deberían incluir un procedimiento que permita detectar de forma sistemática las señales o las alegaciones de tortura y otros malos tratos en el momento del ingreso. Por consiguiente, un examen médico realizado de forma adecuada deberá contribuir a garantizar que los detenidos que hayan sido objeto de torturas o malos tratos durante la detención, en las dependencias de la policía o en los lugares de detención donde hayan permanecido anteriormente, sean identificados y sometidos a un examen médico conforme con el Protocolo de Estambul, a fin de recabar pruebas de tales actos. Esto contribuirá a la lucha contra la impunidad frente a los casos de tortura a través del seguimiento de las denuncias y la remisión de los casos a las fuerzas del orden y las autoridades judiciales a fin de que den curso a la investigación, de conformidad con las obligaciones internacionales de garantizar que los presuntos autores respondan de sus actos y las víctimas obtengan reparación.

El examen médico inicial tiene un papel importante en la prevención de la tortura y otros malos tratos. Uno de los objetivos importantes de los exámenes médicos es la detección de señales de tortura y malos tratos. El hecho que las víctimas sean identificadas adecuadamente y de que, por tanto, la tortura no pase desapercibida y los autores respondan de sus actos, puede constituir un poderoso medio de disuasión para los autores, motivo por el cual los exámenes médicos tienen un papel fundamental en la prevención de nuevos actos de tortura

El examen médico inicial previene los malos tratos derivados de la falta de atención médica a los detenidos. Deben incluir la detección de cualquier enfermedad o problema de salud que pueda presentar el detenido en el momento del ingreso en un establecimiento penitenciario. Esto contribuirá a garantizar la continuidad de los tratamientos ya prescritos y a identificar enfermedades y afecciones no diagnosticadas que requieran tratamiento y/u otras medidas y ayudará a prevenir los malos tratos resultantes de la desatención de necesidades médicas.

Los exámenes médicos iniciales también pueden proteger al personal y la dirección de una institución contra las alegaciones falsas de tortura y otros malos tratos. La detección de casos de tortura en el momento del ingreso permite probar que las lesiones se infligieron antes de la llegada a la institución y no durante el internamiento. Por consiguiente, tiene un papel importante en caso de que se presenten alegaciones falsas, en particular cuando la carga de la prueba recae en el Estado una vez que el presunto caso de tortura llega a los tribunales.

De las constancias remitidas por el entonces Director General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., en su informe 045/DJ/2021 a esta Comisión Estatal, no obra constancia de certificado de integridad física y/o examen médico inicial, además AR1, en su oficio número 00/90/21, del 25 de febrero de 2021, corroboró que V fue puesto a su disposición por policías de la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado, por una falta administrativa, sin haber realizado la certificación médica, no obstante, AR1 no realizó las acciones necesarias para que la corporación policiaca municipal practicara el examen médico inicial.

En consecuencia, la omisión de realizar el certificado de integridad física y/o examen médico inicial a V, al momento de ser puesto a disposición AR1 y AR2, no garantizó los derechos humanos de V, ya que permitió que servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., realizaran actos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

RECOMENDACIONES

C. Presidente Municipal Constitucional de Matehuala:

IX. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la finalidad de que sea reparado de manera integral el daño ocasionado a V, se instruya a quien corresponda para que realice las acciones efectivas para su reparación conforme a los términos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, así mismo se solicite a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas la inscripción de la persona víctima en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que, en el sólo caso que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, no cubra a satisfacción la reparación del daño a que tienen derecho la víctima, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, sin que el acceso a éste beneficio exima a la Autoridad responsable de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.

SEGUNDA. Como Garantía de No Repetición, realice las gestiones necesarias a efecto de que se incluya un programa de capacitación al personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., incluyendo a mandos superiores, mandos medios y Jueces Calificadores sobre los temas de: “Erradicación de tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura” conductas consideradas como violaciones graves a derechos humanos, derecho al debido proceso y derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.

TERCERA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación CDI-1, que se tramita en la Delegación Regional Segunda Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se integren y resuelvan conforme a derecho proceda. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.

CUARTA. Instruya a quien corresponda a fin de que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, S. L. P., cuente con los médicos necesarios que deberán de estar de forma permanente en las instalaciones y así se garantice la debida certificación de integridad física de las personas privadas de su libertad. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.

QUINTA. Se designe a una persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con esta Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.